Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, a dieciséis de octubre de dos mil veinticuatro.

**VISTO** el expediente electrónico formado con motivo del recurso de revisión con número **05145/INFOEM/IP/RR/2024**, promovido por un particular de manera anónima**,** quien en lo sucesivo se le denominara como la parte **Recurrente**, en contra de la respuesta del **Secretaría de Movilidad,** en lo subsecuente **el Sujeto Obligado,** se procede a dictar la presente resolución.

**A N T E C E D E N T E S**

**PRIMERO.** Con fecha cuatro de julio de dos mil veinticuatro, la parte **Recurrente** presentó a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, en lo posterior el **SAIMEX**, ante **el Sujeto Obligado**, solicitud de acceso a la información pública, la cual quedó registrada bajo el número de expedientes **00480/SMOV/IP/2024,** mediante la cual solicitó información en el tenor siguiente:

*“Desde que inicio el programa de chatarrización cuantos kilos se chatarrizaron, cuanto se le pago XXXXXXXX con las facturas o documento que demuestre cuanto se le pago a la empresa y cuanto se gano el Gobierno con los documentos no con links que no abren y no dicen nada, los conveniso con las empresas chatarrizadoras, o contratos con las empresas chatarrizadoras, los edictos públicados, los oficios firmados por el Director de Chatarrización o Reciclaje que esta en su organigrama los oficios del año 2022 y 2023 no se puede decir que no existe por que esta en su organigrama y reglamento.”*

Modalidad de entrega: ***A través del SAIMEX***

**SEGUNDO.** En fecha seis de agosto de dos mil veinticuatro, de conformidad con las constancias electrónicas, se observa que el **Sujeto Obligado** notificó al entonces **Solicitante,** la respuesta, en los términos siguientes:

*“En respuesta a la solicitud recibida, nos permitimos hacer de su conocimiento que con fundamento en el artículo 53, Fracciones: II, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, le contestamos que:*

*Se contesta folio 00480/SMOV/IP/2024”* (sic)

Asimismo, se hace constar que el **Sujeto Obligado** adjuntó el documento electrónico *“****SAIMEX0048-SMOV-IP-2024.pdf****”*, que habrá ser objeto de estudio y análisis en el apartado correspondiente.

**TERCERO.** Inconforme con la respuesta proporcionada, el día veintiséis de agosto de dos mil veinticuatro, la parte **Recurrente** interpuso recurso de revisión, quedando registrados en el **SAIMEX** con el número de recurso **05145/INFOEM/IP/RR/2024,** en los que expresó como acto impugnado y razones o motivos de inconformidad, lo siguiente:

**Acto impugnado:**

*“Creo que la dependencia no tiene idea de sus funciones,* *no es la primera vez que se solicita esta información que es de interés y me la niegan diciendo que no tiene la información y no es de su competencia cuando si es de competencia, por lo que se solicita se apeguen a la ley y me entreguen la información o que el informe intervenga y obligue a que me entreguen información de mi interés que garantice mi derecho y sancione a quien la oculta con dolo.”*

**Razones o motivos de inconformidad:**

*“No entregan información que estas en su poder y es información pública.”*

**CUARTO.** Recurso de revisión que, se envió electrónicamente al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios y con fundamento en el artículo 185 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se turnó a través del **SAIMEX** al Comisionado Presidente **JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS,** a efecto de que decretara su admisión o desechamiento.

En fecha veintinueve de agosto de dos mil veinticuatro, atentos a lo dispuesto en el artículo 185 fracciones I, II y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se acordó la admisión a trámite del referido recurso de revisión, así como la integración del expediente respectivo, que se puso a disposición de las partes, para que en un plazo máximo de siete días hábiles, realizarán manifestaciones y ofrecieran las pruebas y alegatos que a su derecho conviniera o exhibieran el informe justificado, según fuera el caso.

**QUINTO.** Una vez abierta la etapa de instrucción, se advierte que, el **Sujeto Obligado** rindió su informe justificado por medio de los documentos *“****oficio reciclaje pdf.pdf*** e ***inorme justificado 5145.pdf****”*, los cuales fueron puestos a la vista de la parte **Recurrente**, a efecto que presentara las manifestaciones que a sus intereses conviniera, sin que exista constancia del desahogo a la misma.

Asimismo, se aprecia que no se llevaron a cabo audiencias durante la sustanciación del recurso de revisión todo lo anterior en términos de los artículos 185 fracciones II y IV, y 195 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**SEXTO.** Una vez transcurrido el periodo otorgado a las partes de siete días hábiles para realizar sus manifestaciones en el acuerdo de admisión, y no habiendo prueba pendiente por desahogar, ni que documentos que integrar al expediente electrónico, se decretó el cierre de instrucción en fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro, en términos del artículo 185 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, ordenándose turnar los expedientes a la resolución que en derecho proceda.

**SÉPTIMO.** De las constancias que integran el expediente electrónico, se advierte que ha transcurrido el término de Ley, para la emisión de la resolución en el presente recurso de revisión, por lo que en fecha catorce de octubre de dos mil veinticuatro, se notificó a las partes el acuerdo por el que se ordena ampliar el plazo para la emisión de la resolución, en términos del artículo 181 párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, ordenándose turnar los expedientes a la resolución que en derecho proceda.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO. De la competencia**.

Este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver los presentes recursos de revisión interpuestos por el ahora **Recurrente**, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 1, 2 fracción II, 13, 29, 36 fracciones I y II, 176, 178, 179, 181 párrafo tercero y 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; y 7, 9 fracciones I y XXIII, y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**SEGUNDO. Del alcance de los recursos de revisión.**

Derivado de la impugnación realizada, es menester señalar que el recurso de revisión inmerso en la Ley de Transparencia vigente en la entidad, tiene el fin y alcance que señalan los numerales 176, 179, 181 párrafo cuarto, 194 y 195 y demás aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios vigente, el cual será analizado conforme a las actuaciones que obren en el expediente electrónico, con la finalidad de reparar cualquier posible afectación al derecho de acceso a la información pública y garantizando el principio rector de máxima publicidad.

Así mismo, esta Ponencia considera importante abordar el análisis de los requisitos de procedibilidad de los recursos de revisión, así el artículo 180 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que establece lo siguiente:

*“****Artículo 180****. El recurso de revisión contendrá:*

***I****. El Sujeto Obligado ante la cual se presentó la solicitud;*

***II****. El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero interesado, así como la dirección o medio que señale para recibir notificaciones;*

***III****. El número de folio de respuesta de la solicitud de acceso;*

***IV****. La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, o de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta;*

***V****. El acto que se recurre;*

***VI****. Las razones o motivos de inconformidad;*

***VII****. La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, en el caso de respuesta de la solicitud; y*

***VIII****. Firma del Recurrente, en su caso, cuando se presente por escrito, requisito sin el cual se dará trámite al recurso.*

*Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere procedentes someter a juicio del Instituto.*

*En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.*

*En caso de que el recurso se interponga de manera electrónica no será indispensable que contengan los requisitos establecidos en las fracciones II, IV, VII y VIII.”*

(Énfasis añadido)

En principio, de una interpretación del artículo transcrito se observan los requisitos que deberán contener los recursos de revisión; sobre el particular, de la revisión del expediente electrónico del SAIMEX se desprende que el solicitante y ahora Recurrente, en ejercicio de su derecho de acceso a la información pública, no proporcionó un nombre para que sea identificado, ya que en el apartado de “DATOS DEL SOLICITANTE”, no señalo como nombre o seudónimo con el cual desee identificarse, por lo que no tiene certeza sobre su identidad, lo que en estricto sentido, no se colmarían los requisitos establecidos en el citado artículo 180 de la Ley de Transparencia.

No obstante lo anterior, debe destacarse que el artículo 15 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios prevé que toda persona tendrá acceso a la información sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, de lo que se infiere que para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, el nombre no es un requisito *sine qua non* que los particulares y, en su caso, los Recurrentes deban señalar, por el contrario la Ley de Transparencia prevé en su artículo 155, párrafo segundo la posibilidad de que las solicitudes de información sean anónimas, con nombre incompleto o seudónimo.

Correlativo a ello, cabe mencionar que los artículos 6, Apartado A, fracciones I, III, V y VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5 párrafos vigésimo, vigésimo primero y vigésimo segundo fracciones I y III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, garantizan el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, toda vez que disponen que toda persona sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública; preceptos cuyo texto y sentido literal es el siguiente:

***Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos***

*“****Artículo 6o****. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.*

*Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.*

*Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:*

***A****. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:*

***I****. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.*

*…*

***III.*** *Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.*

*…*

***V****. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.*

***VI.*** *Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.”*

*…*

*La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.*

***Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México***

*“****Artículo 5****. …*

*…*

*El derecho a la información será garantizado por el Estado. La ley establecerá las previsiones que permitan asegurar la protección, el respeto y la difusión de este derecho.*

*Para garantizar el ejercicio del derecho de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, los poderes públicos y los organismos autónomos, transparentarán sus acciones, en términos de las disposiciones aplicables, la información será oportuna, clara, veraz y de fácil acceso.*

*Este derecho se regirá por los principios y bases siguientes:*

***I****. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos estatales y municipales, así como del gobierno y de la administración pública municipal y sus organismos descentralizados, asimismo de cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de interés público y seguridad, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.*

*…*

***III****. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.”*

(Énfasis añadido)

Por otra parte, del contenido del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se destaca lo siguiente:

*“****Artículo 1o.*** *En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.*

*Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.*

*Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”*

En esa virtud, de una interpretación sistemática, armónica y progresiva del derecho humano de acceso a la información pública se reitera que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, deberá tener acceso a la información pública, es decir, dicho derecho fundamental exime a quien lo ejerce, de acreditar su legitimación en la causa o su interés en el asunto, lo que permite la posibilidad de que inclusive, la solicitud de acceso a la información pueda ser anónima o no contener un nombre que identifique al solicitante o que permita tener certeza sobre su identidad.

Robustece lo anterior, el Criterio 6/2014 del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el cual se reproduce para una mayor referencia:

*“****Acceso a información gubernamental. No debe condicionarse a que el solicitante acredite su personalidad, demuestre interés alguno o justifique su utilización.*** *De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6o., apartado A, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1º, 2º, 4º y 40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la respuesta a una solicitud de acceso a información y entrega de la misma, no debe estar condicionada a que el particular acredite su personalidad, demuestre interés alguno o justifique su utilización, en virtud de que los sujetos obligados no deben requerir al solicitante mayores requisitos que los establecidos en la Ley. En este sentido, las dependencias y entidades, sólo deberán asegurarse de que, en su caso, se haya cubierto el pago de reproducción y envío de la información, mediante la exhibición del recibo correspondiente.*

***Resoluciones***

***• RDA 5275/13.*** *Interpuesto en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional. Comisionado Ponente Ángel Trinidad Zaldívar.*

***• RDA 2937/13.*** *Interpuesto en contra de LICONSA, S.A. de C.V. Comisionado. Ponente Gerardo Laveaga Rendón.*

***• RDA 3609/12.*** *Interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública. Comisionada Ponente Sigrid Arzt Colunga.*

***• RDA 3361/12.*** *Interpuesto en contra del Servicio de Administración Tributaria. Comisionada Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeño.*

***• RDA 0563/12.*** *Interpuesto en contra de la Secretaría de la Función Pública. Comisionada Ponente Jacqueline Peschard Mariscal.”*

En ese orden de ideas, se estima que el requerimiento relativo al nombre como presupuesto de procedibilidad podría limitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, debido a que el hecho de solicitar la identificación del Recurrente a través de dicho dato personal, en ciertos extremos se equipara a una exigencia acerca de su interés o justificación de su utilización, lo que materialmente haría nugatorio un derecho fundamental.

Aunado a ello, para el estudio de la materia sobre la que se resuelven los recursos de revisión resulta intrascendente el nombre de la persona que lo hubiere promovido, en virtud de que tanto la Constitución Federal, como la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, reconocen la prerrogativa de los individuos para no acreditar dicho interés o justificar su utilización, por lo que este Órgano Garante en la materia se encuentra impedido para realizar dicho análisis, en la inteligencia de que al limitar un derecho humano, como lo es el derecho de acceso a la información pública, por una cuestión procedimental.

En consecuencia, dado lo expuesto y fundado con anterioridad, se estima que el requisito relativo al nombre del Recurrente no constituye un presupuesto indispensable de procedibilidad de los recursos de revisión, en términos de los artículos 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 1 párrafos segundo y tercero, 6 apartado A, fracciones III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, párrafo vigésimo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, debido a que el acceso a la información pública es un derecho humano que no requiere legitimación en la causa, sino que únicamente basta con que se encuentre legitimado en el procedimiento de recurso de revisión, circunstancia que se acredita en las constancias electrónicas del expediente, de las que se desprende que el Recurrente, es la misma persona que realizó la solicitud de acceso a la información pública que ahora se impugna.

De igual manera, el propio artículo 180 de la Ley de Transparencia local, en su último párrafo establece que cuando el recurso se interponga de manera electrónica, no será indispensable que contenga determinados requisitos, entre ellos, el nombre del Recurrente, por lo que, en el presente caso, al haber sido presentado el recurso de revisión vía SAIMEX, dicho requisito resulta innecesario.

**TERCERO. Del estudio de las causas de improcedencia.**

El estudio de las causas de improcedencia que se hagan valer por las partes o que se advierta de oficio por este Resolutor debe ser objeto de análisis previo al estudio de fondo del asunto ya que el estudio de los presupuestos procesales sobre el inicio o trámite de un proceso genera eficacia jurídica de las resoluciones, más aún que se trata de una figura procesal adoptada en la ley de la materia la cual impide su estudio y resolución cuando una vez admitido el recurso de revisión se advierta una causa de improcedencia que permita sobreseer el recurso de revisión sin estudiar el fondo del asunto; circunstancias anteriores que no son incompatibles con el derecho de acceso a la justicia, ya que éste no se coarta por regular causas de improcedencia y sobreseimiento con tales fines.

***IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.*** *Del examen de compatibilidad de los artículos* [*73 y 74 de la Ley de Amparo*](javascript:AbrirModal(1)) *con el artículo* [*25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos*](javascript:AbrirModal(2))***no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo,*** *en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías.*

Por lo que, una vez analizadas las constancias de los expedientes, se cae en la cuenta de que, no se actualiza ninguna de las casuales a continuación transcritas:

*“****Artículo 191****. El recurso será desechado por improcedente cuando:*

***I****. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la presente Ley, a partir de la respuesta;*

***II****. Se esté tramitando ante el Poder Judicial de la Federación algún recurso o medio de defensa interpuesto por el recurrente;*

***III****. No actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;*

***IV****. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley;*

***V****. Se impugne la veracidad de la información proporcionada;*

***VI****. Se trate de una consulta, o trámite en específico; y*

***VII****. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos contenidos.”*

Ya que no fue interpuesto de forma extemporánea, no se está tramitando ante el Poder Judicial Federal, no es una consulta, o trámite en específico, ni tampoco se advierte que la parte **Recurrente** amplíe su solicitud en el recurso de revisión, por lo que al no existir causas de improcedencia invocadas por las partes ni advertidas de oficio, este Órgano Garante de la Transparencia se avoca al análisis del fondo del asunto que nos ocupa.

**CUARTO. Estudio y resolución de los recursos de revisión.**

Se procede al análisis de los presentes recursos, así como al contenido íntegro de las actuaciones que obran en el expediente electrónico, para así estar en posibilidades este Órgano Colegiado de dictar el fallo correspondiente conforme a derecho, tomando en consideración los elementos aportados por las partes y apegándose en todo momento al principio de máxima publicidad consagrado en nuestra Constitución Federal, Local y demás leyes aplicables en la materia, así como en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, en concordancia con el artículo 8° de la Ley de Transparencia local.

Atentos a la redacción de la solicitud de información, se puede apreciar que la parte **Recurrente** peticiona del desde que inició el programa de chatarrización, lo siguiente:

1. cuantos kilos se chatarrizaron,
2. cuanto se le pago XXXXXXXX con las facturas o documento que demuestre cuanto se le pago a la empresa y cuanto se gano el Gobierno con los documentos no con links que no abren y no dicen nada,
3. los conveniso con las empresas chatarrizadoras, o contratos con las empresas chatarrizadoras,
4. los edictos públicados,
5. los oficios firmados por el Director de Chatarrización o Reciclaje que esta en su organigrama los oficios del año 2022 y 2023

El **Sujeto Obligado** emitió respuesta por medio del archivo electrónico *“****SAIMEX0048-SMOV-IP-2024.pdf****”*, consistente en el oficio 220000080lOOOOS/125/2024, remitido por el Director de Reciclaje de Vehículos al Coordinador de Control Técnico y Titular de la Unidad de Transparencia, ambos del Sujeto Obligado, a través del cual dio respuesta, en los términos siguientes:

*“A continuación, se da contestación a los cuestionamientos planteados de acuerdo a la orden de la solicitud:*

***1. " ... desde que inicio el programa de chatarrización cuantos kilos se chatarrizaron, …”***

*No se detenta con la información en virtud, de que esta Unidad Administrativa no genera, posee o Administra dicha información.*

***2. " ... cuanto se le pago XXXXXX con las facturas o documento que demuestre cuanto se le pago a la empresa ... "(Sic);***

*No se cuenta con la información porque esta área administrativa, no genera, posee o administra dicha información.*

***3. "... y cuanto se gano el Gobierno con los documentos no con links que no abren y no dicen nada ... "***

*No se cuenta con la información porque esta área administrativa, no genera, posee o administra dicha información.*

***4. "...los conveniso con las empresas chatarrizadoras, o contratos con las empresas chatarrizadoras ... "***

*No se cuenta con la información en virtud, de que esta Unidad Administrativa carece de facultades para celebrar contratos con las empresas chatarrizadoras que intervienen en la ejecución del programa de reciclaje. Toda vez que la Dirección de Reciclaje de Vehículos únicamente lleva a cabo la Ejecución del Procedimiento de Declaración de Abandono a que se refieren los artículos del 7.74 al 7.78 del Código Administrativo del Estado de México.*

***5. " ...los edictos publicados ... "***

*Se proporciona la información, orientando al solicitante indicándole que la información se encuentra en el Link:* [*https://smovilidad.edomex.gob.mx/chatarrizacion*](https://smovilidad.edomex.gob.mx/chatarrizacion)*, de la página de la Secretaría de Movilidad del Estado de México.*

***6. " ...los oficios firmados por el Director de Chatarrización o Reciclaje que esta en su organigrama los oficios del año 2022 y 2023 no se puede decir que no existe porque esta en su organigrama y reglamento ... "***

*De conformidad con lo dispuesto por el artículo 759 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se le indica que no es posible atender su solicitud, en virtud de que, de la forma en que realiza su petición de información, resulta insuficiente para determinar por esta autoridad la clase de información que requiere, por lo que, una vez que precise o proporcione mayores elementos en ese sentido, se estará en condiciones de atender su petición.”*

(Énfasis añadido)

Inconforme con la respuesta, la parte **Recurrente** interpuso el recurso de revisión, señalando como **acto impugnado,** esencialmente *“… no es la primera vez que se solicita esta información que es de interés y me la niegan diciendo que no tiene la información y no es de su competencia …”*. Consideraciones que se traducen en la negativa a la información, las cuales resultan fundadas para la interposición del recurso de revisión al encuadrar en la fracción I del artículo 179 de la Ley de Transparencia Local[[1]](#footnote-1).

Con motivo de la interposición del recurso de revisión, el **Sujeto Obligado** rindió su informe justificado por medio de los documentos *“****oficio reciclaje pdf.pdf*** e ***inorme justificado 5145.pdf****”*, de los que se desprende el contenido siguiente:

* **inorme justificado 5145.pdf**: Oficio CCT/UT/1069/2024, remitido por el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado a este Órgano Garante, mediante el cual informó haber turnado el requerimiento al Instituto de Transporte, quien emitió el pronunciamiento siguiente:

*"Se informa que, después de realizar una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos que obran en las oficinas de la Dirección de Reciclaje Vehículos, no se encontró información relativa a cuantos kilos se chatarrizaron desde que inició el programa, sin embargo, se detectó que por error involuntario en su momento no se envió la información que obra en el archivo, por lo cual se informa que se encontró un documento relativo al número de vehículos publicados en edictos en el periodo de 2015 al 2017, en el cual se señala: el número de vehículos desglosados por zona, fecha de publicación de edictos, objetivo del programa y fundamento. En tal virtud y a fin de robustecer la respuesta al solicitante, se anexa al presente el documento referido (Anexo 1); lo anterior con fundamento en el artículo 12 párrafo segundo de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipio ... "(sic)*

* **oficio reciclaje pdf.pdf**: Archivo que se encuentra integrado por los documentos siguientes:
* Oficio 220000080000005/134/2024 remitido por la Encargada de la Dirección de Reciclaje de Vehículos al Titular de la Unidad de Transparencia, ambos del Sujeto Obligado, mediante el cual emitió respuesta en los términos siguientes:

***“Desde que inició el programa de chatarrizacion cuántos kilos se chatarrizaron" (Sic)***

*Se informa que, después de realizar una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos fisicos y electrónicos que obran en las oficinas de la Dirección de Reciclaje Vehículos, no se encontró información relativa a cuantos kilos se chatarrizaron desde que inició el programa, sin embargo, se detectó que por error involuntario en su momento no se envió la información que obra en el archivo, por lo cual se informa que se encontró un documento relativo al número de vehículos publicados en edictos en el periodo de 2015 al 2017, en el cual se señala: el número de vehículos desglosados por zona, fecha de publicación de edictos, objetivo del programa y fundamento. En tal virtud y a fin de robustecer la respuesta al solicitante, se anexa al presente el documento referido (Anexo 1):*

*…*

*“cuanto se le pago XXXXXX con las facturas o documento que demuestre cuanto se le pago a la empresa y cuanto se gano el Gobierno con los documentos no con links que no abren y no dicen nada, los conveniso con las empresas chatarrizadoras, o contratos con las empresas chatarrizadoras,*

*Al respecto, se da cuenta que la Dirección de Reciclaje de Vehículos es la unidad ejecutora del Programa de Reciclaje de Vehículos, de conformidad con el Manual General de Organización de la Secretaría de Movilidad, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” del Estado de México en fecha 08 de julio del año 2022, el cual señala como objetivo de la Dirección: “Coadyuvar en la ejecución del procedimiento de reducción fisica (Programa de Reciclaje de Vehículos-Chatarrización), declaración de abandono y disposición final de los vehículos que se encuentren en los depósitos regulados por la Secretaría” (sic), por lo cual, al ser únicamente la unidad administrativa ejecutora, no se encuentra obligada a resguardar dicha información, por lo cual no tiene acceso a facturas o documentos que demuestren cuánto se le pagó a las empresas encargadas de llevar a cabo la chatarrización, ya que no está en sus facultades la contratación de bienes y/o servicios para la ejecución del Programa.*

*En virtud de lo anterior, se informa que el área facultada para celebrar contratos, convenios, generar, concentrar, y administrar la información relativa a contrataciones, así como acceso a facturas o documentos que demuestren cuánto se paga a las empresas encargadas de llevar a cabo la chatarrización, es la Oficialía Mayor, esto con fundamento en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México…*

***“los edictos públicados”***

*La información se encuentra publicada en la página oficial de la Secretaría de Movilidad del Estado de México; en tal sentido y con el objeto de orientar al solicitante, se proporciona el link correspondiente:* [*https://smovilidad.edomex.gob.mx/chatarrizacion*](https://smovilidad.edomex.gob.mx/chatarrizacion)*. Asimismo, se explican los pasos a seguir para que el usuario tenga acceso a la información:*

*…*

***- “los oficios firmados por el Director de Chatarrizacion o Reciclaje que está en su organigrama los oficios del año 2022 y 2023 no se puede decir que no existe porque está en su organigrama y reglamento”(sic)***

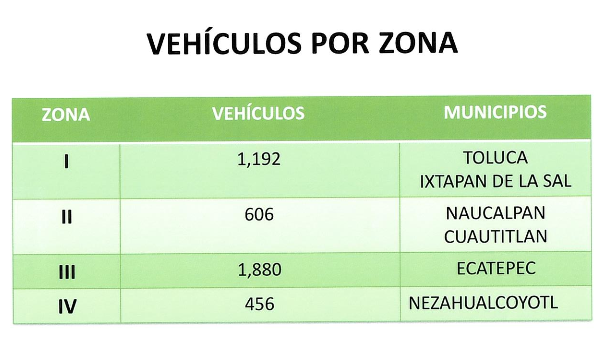
*Al respecto, en atención a la modalidad de entrega señalada en su solicitud ingresada vía el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), hago de su conocimiento que la información solicitada únicamente podrá ser puesta a disposición del solicitante mediante consulta directa (in situ) conforme a lo previsto por la Ley de Transparencia y Ácceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en virtud de la excesiva cantidad de información y las limitaciones técnicas y humanas que tiene esta Dirección para el adecuado escaneo de los documentos solicitados. Lo anterior al no contar con el equipo adecuado para la digitalización y por ser quien suscribe la única persona al interior de la oficina a mi cargo. Para ello, le solicito respetuosamente registrar la incidencia y el cambio de modalidad a la Dirección de Informática del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.*

*Por lo anterior, resulta oportuno citar los artículos 158 y 164 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, mismos que a la letra dicen:*

*…*

(Énfasis añadido)

* Programa de Reciclaje de Vehículos “Chatarrización”, en el cual se advierte la fundamentación para su implementación, así como, los cuadros siguientes:





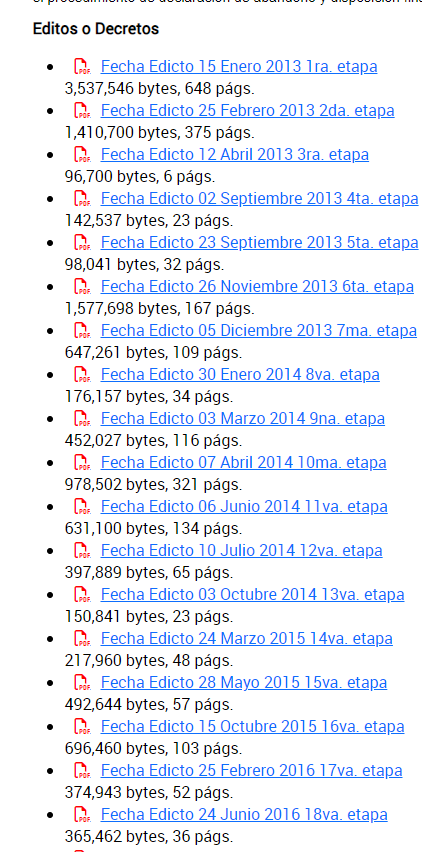
Acotado lo anterior, podemos establecer que la ***Litis*** en el presente asunto, se delimita en determinar si la respuesta del **Sujeto Obligado** se encuentra apegada a derecho, por lo que se procede en los términos siguientes:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Requerimiento desde que inició el programa de chatarrización** | **Respuesta**  **Del Director de Reciclaje de Vehículos** | **Informe Justificado**  **Instituto de Transporte** | **Determinación** |
| 1. cuantos kilos se chatarrizaron; | *“No se detenta con la información en virtud, de que esta Unidad Administrativa no genera, posee o Administra dicha información.”* | *"Se informa que, después de realizar una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos que obran en las oficinas de la Dirección de Reciclaje Vehículos, no se encontró información relativa a cuantos kilos se chatarrizaron desde que inició el programa, sin embargo, se detectó que por error involuntario en su momento no se envió la información que obra en el archivo, por lo cual se informa que se encontró un documento relativo al número de vehículos publicados en edictos en el periodo de 2015 al 2017, en el cual se señala: el número de vehículos desglosados por zona, fecha de publicación de edictos, objetivo del programa y fundamento…”*  *“…al ser únicamente la unidad administrativa ejecutora, no se encuentra obligada a resguardar dicha información, por lo cual no tiene acceso a facturas o documentos que demuestren cuánto se le pagó a las empresas encargadas de llevar a cabo la chatarrización, ya que no está en sus facultades la contratación de bienes y/o servicios para la ejecución del Programa.*  *En virtud de lo anterior, se informa que el área facultada para celebrar contratos, convenios, generar, concentrar, y administrar la información relativa a contrataciones, así como acceso a facturas o documentos que demuestren cuánto se paga a las empresas encargadas de llevar a cabo la chatarrización, es la Oficialía Mayor, esto con fundamento en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México…”* | **Parcialmente**  Al haber sido peticionada la información desde el inicio del programa, y al haber hecho entrega a partir del año 2015, faltando lo relativo de 2013 a 2014 y de 2018 a 2024. |
| 2. cuanto se le pago XXXXXXX con las facturas o documento que demuestre cuanto se le pago a la empresa y cuanto se gano el Gobierno con los documentos no con links que no abren y no dicen nada | **Colmado**  Al ser incompetentes, con motivo de la transferencia de atribuciones a la Oficialía Mayor. |
| 3. los conveniso con las empresas chatarrizadoras, o contratos con las empresas chatarrizadoras; y | *No se cuenta con la información en virtud, de que esta Unidad Administrativa carece de facultades para celebrar contratos con las empresas chatarrizadoras que intervienen en la ejecución del programa de reciclaje. Toda vez que la Dirección de Reciclaje de Vehículos únicamente lleva a cabo la Ejecución del Procedimiento de Declaración de Abandono a que se refieren los artículos del 7.74 al 7.78 del Código Administrativo del Estado de México.* |
| 4. los edictos publicados; | *Se proporciona la información, orientando al solicitante indicándole que la información se encuentra en el Link:* [*https://smovilidad.edomex.gob.mx/chatarrizacion*](https://smovilidad.edomex.gob.mx/chatarrizacion)*, de la página de la Secretaría de Movilidad del Estado de México.* | Ratifico | **Colmado**  Al obrar la información en la página electrónica. |
| 5. los oficios firmados por el Director de Chatarrización o Reciclaje que esta en su organigrama los oficios del año 2022 y 2023 | *“…se le indica que no es posible atender su solicitud, en virtud de que, de la forma en que realiza su petición de información, resulta insuficiente para determinar por esta autoridad la clase de información que requiere, por lo que, una vez que precise o proporcione mayores elementos en ese sentido, se estará en condiciones de atender su petición.”* | *“…hago de su conocimiento que la información solicitada únicamente podrá ser puesta a disposición del solicitante mediante consulta directa (in situ)…”*  *“…en virtud de la excesiva cantidad de información y las limitaciones técnicas y humanas que tiene esta Dirección para el adecuado escaneo de los documentos solicitados. Lo anterior al no contar con el equipo adecuado para la digitalización y por ser quien suscribe la única persona al interior de la oficina a mi cargo.”*  Informó parcialmente el procedimiento para acudir a la consulta de la información (faltando horario, periodo en que estaría disponible y servidor público que apoyaría) | **No colmado**  Al no encontrarse acreditada la imposibilidad técnica ni humana. |

Atentos al cuadro anterior, se observa que, respecto al requerimiento **1** “cuantos kilos fueron chatarrizaron” se tiene por satisfechos parcialmente, atendiendo que, si bien, el **Sujeto Obligado** informó en un primer momento, no contar con la información al no ser el área competente, también es cierto que, en su informe justificado, preciso que no se tiene la información por cantidad de kilos, si no, por cantidad de vehículos, proporcionando la cantidad de vehículos por zona de los años 2015, 2016 y 2017, sin haberse pronunciado de los años 2013, 2014, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ,2023 y del uno de enero al cuatro de julio de 2024.

Respecto del requerimiento **4** “los edictos publicados”, el **Sujeto Obligado** proporcionó el enlace electrónico https://smovilidad.edomex.gob.mx/chatarrizacion, del que se procedió a su consulta, advirtiendo el contenido siguiente:





Conforme a lo anterior, se acredita que el **Sujeto Obligado** hizo entrega de la información, al proporcionar de manera directa el enlace electrónico que contiene la información, teniéndose por satisfecho, en términos del artículo 161 de la Ley de Transparencia Local[[2]](#footnote-2).

En lo que, corresponde a los requerimientos **2** y **3**, relativos a los pagos y los convenios o contratos con a las empresas encargadas de la chatarrización. El **Sujeto Obligado** primeramente, respondió a través de su Dirección de Reciclaje de Vehículos, no ser el área competente, posteriormente, manifestó que, de conformidad con la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, mediante la cual se hizo la transferencia de atribuciones y de estructura de la Secretaría de Finanzas a la Oficialía Mayor, es que, ésta última es quien posee la información.

Atendiendo a lo anterior, atendiendo a la naturaleza de la información (facturas, convenios o contratos), conviene realizar el análisis de los artículos 1°, fracción IV y 4° de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, que especifica que, **los organismos auxiliares públicos de carácter estatal, como el caso del Sujeto Obligado,** serán los encargados de realizar los actos relativos a la planeación, programación, presupuestación, ejecución y **control de la adquisición** (bienes muebles e inmuebles), arrendamiento (bienes muebles e inmuebles), y **la contratación de servicios de cualquier naturaleza**, los cuales se adjudicarán a través de **licitaciones públicas, invitación restringida o adjudicación directa, mediante convocatoria pública**, que señalan al respecto lo siguiente:

***“Artículo 1.-*** *Esta Ley tiene por objeto regular los actos relativos a la planeación, programación, presupuestación, ejecución y control de la adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes, y la contratación de servicios de cualquier naturaleza, que realicen:*

*[…]*

***IV. Los organismos auxiliares*** *y fideicomisos* ***públicos, de carácter estatal*** *o municipal.*

*…*

***Artículo 4.-*** *Para los efectos de esta Ley, en las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios, quedan comprendidos:*

*I. La adquisición de bienes muebles.*

*II. La adquisición de bienes inmuebles, a través de compraventa.*

*III. La enajenación de bienes muebles e inmuebles.*

*IV. El arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.*

*V. La contratación de los servicios, relacionados con bienes muebles que se encuentran incorporados o adheridos a bienes inmuebles, cuya instalación o mantenimiento no implique modificación al bien inmueble.*

*VI. La contratación de los servicios de reconstrucción y mantenimiento de bienes muebles.*

*VII. La contratación de los servicios de maquila, seguros y transportación, así como de los de limpieza y vigilancia de bienes inmuebles.*

*VIII. La prestación de servicios profesionales, la contratación de consultorías, asesorías y estudios e investigaciones, excepto la contratación de servicios personales de personas físicas bajo el régimen de honorarios.*

***En general, otros actos que impliquen la contratación de servicios de cualquier naturaleza. “***

(Énfasis añadido)

En ese contexto, conforme a los artículos 26 y 27 de dicho ordenamiento jurídico, se establece que las **adquisiciones**, arrendamientos y servicios, **se adjudicarán a través de procedimientos de licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa**, que señalan:

*“****Artículo 26.-*** *Las* ***adquisiciones****, arrendamientos y servicios se adjudicarán a través de* ***licitaciones públicas****,* ***mediante convocatoria pública.***

*Artículo 27.- La Oficialía Mayor, las entidades, los tribunales administrativos y los* ***ayuntamientos podrán adjudicar adquisiciones, arrendamientos y servicios****, mediante las excepciones al procedimiento de licitación que a continuación se señalan:*

***I. Invitación restringida.***

***II. Adjudicación directa”***

*(*Énfasis añadido*)*

Así, en lo que respecta sobre la licitación pública, el artículo 29 de la Ley de la Contratación Pública en mención, indica que en este procedimiento deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los licitantes. Todo licitante que satisfaga los requisitos de la convocatoria y de las bases de la licitación tendrá derecho a presentar su propuesta.

En ese orden de ideas, el **Sujeto Obligado** informó en la etapa de manifestaciones que **no es competente** para poseer la información, ello de conformidad con lo establecido en el Acuerdo por el que se transfieren los recursos de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México a la Oficialía Mayor, artículo que se cita a continuación para pronta referencia:

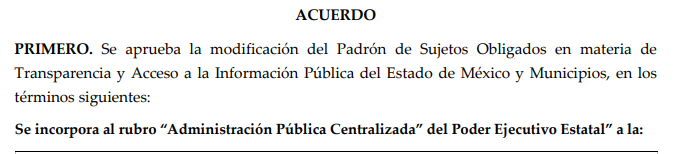
*“****ARTÍCULO PRIMERO.*** *El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las acciones, procedimientos y mecanismos para llevar a cabo la transferencia de los recursos financieros, humanos y materiales necesarios para la operación de la Oficialía Mayor, de conformidad con las atribuciones, funciones, competencias y transitorios previstos en Decreto Número 182 de la “LXI” Legislatura del Estado de México, por el cual se expidió la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, publicado el 11 de septiembre de 2023 en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.*

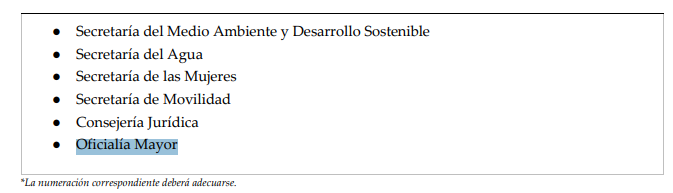
***ARTÍCULO SEGUNDO****. Los recursos humanos, materiales, presupuestales y financieros de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas, con excepción de los relativos a la Dirección General del Sistema Estatal de Informática, que continuará adscrita a la Secretaría de Finanzas, serán transferidos a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo a la Oficialía Mayor. La Secretaría de Finanzas deberá llevar a cabo las acciones necesarias que permitan a la Oficialía Mayor ejercer sus atribuciones y cumplir con sus obligaciones relativas al pago de las prestaciones económicas de los recursos humanos, materiales y financieros, así como las derivadas de los contratos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, de ejecución de obra pública y los correspondientes a la adquisición de los bienes y servicios.”*

(Énfasis añadido)

Ordenamiento normativo que establece de manera clara y precisa la transferencia de los recursos humanos, materiales, presupuestarios y financieros de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas (Sujeto Obligado) a la Oficialía Mayor. Transferencia que se realizó al día hábil siguiente de publicado dicho acuerdo (veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés), es decir el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés.

Atentos a lo anterior, se observa que de conformidad con el Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, Modifica el Padrón de Sujetos Obligados en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se estableció como Sujeto Obligado a la Oficialía Mayor, se inserta la imagen siguiente para pronta referencia:





En ese orden de ideas, con base en el citado acuerdo, se acredita que, el Sujeto Obligado es incompetente para poseer en sus archivos la información relativa a los contratos o convenios con las empresas encargadas de la chatarrización.

No pasa desapercibido para este Órgano Garante que, si bien, en el Reglamento Interior del Sujeto Obligado, se encuentran las atribuciones de la Coordinación Administrativa, en materia de administración de recursos humanos, materiales financieros, son para el funcionamiento de las unidades administrativas, no así, con proveedores por pagos de bienes y/o servicios.

Finalmente, del requerimiento **6** “los oficios firmados por el Director de Chatarrización o Reciclaje”, el **Sujeto Obligado** manifestó no poder atender dicho requerimiento, al carecer de elementos para determinar la clase de información requerida, no obstante, en informe justificado reconoció la existencia de la información pero pretendió el cambio de modalidad a consulta directa, al carecer la Dirección de Chatarrización de las capacidades técnicas y humanas.

Respecto a la procedencia del cambio de modalidad, el numeral 158 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, señala que cuando lo determine el **Sujeto Obligado** podrá solicitar el cambio de modalidad a consulta directa, en el supuesto de que la información se encuentre en su posesión y esta implique análisis, estudio o procesamiento de documentos y **cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas,** administrativas y **humanas**, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, **no siendo óbice mencionar que dicho cambio de modalidad de entrega deberá de estar debidamente fundado y motivado**, en el cual se expliquen las razones o motivos del cambio, exceptuando la información clasificada, la cual se deberá de respaldar de igual manera por un acuerdo de clasificación.

Requisitos de motivación y fundamentación que **no se encuentran cumplidos**, atendiendo que, si bien pretende justificar ser una sola persona en la dirección, así mismo que no cuenta con el equipo adecuado para la digitalización, así como los ordenamientos legales (artículos 158 y 164 de la Ley de Transparencia Local), que establecen los supuestos de procedencia del cambio de modalidad, preceptos que se citan a continuación para pronta referencia:

*“****Artículo 158.*** *De manera excepcional, cuando de forma fundada y motivada así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas administrativas y humanas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrá poner a disposición del solicitante los documentos en consulta directa, salvo la información clasificada.*

*En todo caso, se facilitará su copia simple o certificada, así como su reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, en su caso, aporte el solicitante.*

***Artículo 164.*** *El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad solicitada, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega.*

*En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades.*

***Artículo 166.*** *La obligación de acceso a la información pública se tendrá por cumplida cuando el solicitante tenga a su disposición la información requerida, o cuando realice la consulta de la misma en el lugar en el que ésta se localice.*

*La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información solicitada, durante un plazo mínimo de sesenta días hábiles, contado a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su caso, el pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles.*

*Transcurridos dichos plazos, si los solicitantes no acuden a recibir la información requerida los sujetos obligados darán por concluida la solicitud y procederán, de ser el caso, a la destrucción del material en el que se reprodujo la información.*

*Cuando el sujeto obligado no entregue la respuesta a la solicitud dentro del plazo previsto en la Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer el recurso de revisión previsto en este ordenamiento.*

*Una vez entregada la información, el solicitante acusará recibo por escrito, dándose por terminado el trámite de acceso a la información.”*

(Énfasis añadido)

Bajo este contexto, del pretendido cambio de modalidad sustentado por el Sujeto Obligado y en atención al lineamiento vigésimo sexto de los Lineamientos para la operación del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX) y del Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales del Estado de México (SARCOEM), se desprenden las siguientes consideraciones:

* **No fue señalado el parámetro de inicio y conclusión de plazo para hacer consulta de la información**, el cual en términos del numeral 166 de la Ley de Transparencia local, deberá de encontrarse disponible en un plazo mínimo de sesenta días hábiles, ni fue proporcionado el nombre o cargo de los servidores públicos que lo atenderían
* Previo a sustentar la consulta directa, **no fueron ofrecidas otras modalidades para consulta** de la información, otorgando uso preferente y preponderantemente a medios electrónicos.

Así pues, respecto de lo manifestado por el Sujeto Obligado, este Organismo Garante advierte que el Sujeto Obligado no acreditó una imposibilidad técnica ni humana, aunado que no ofreció otras modalidades de entrega que favorezcan la gratuidad de la información.

Es con base en las consideraciones de hecho y de derecho precisadas en líneas anteriores que, se tiene por acreditada la vulneración del derecho de acceso a la información de la parte **Recurrente**, por lo que, resulta procedente ordenar la entrega de información, debiendo observar lo relativo a la tutela de los datos de carácter sensible y/o confidencial, en términos de las Leyes en la materia.

En el supuesto que los no se cuente con algunos oficios por haber sido cancelados, para efectos de cumplimiento, bastara que el Sujeto Obligado lo haga del conocimiento en términos del párrafo segundo del artículo 19 de la Ley de Transparencia Local.

* ***De la Versión Pública***

Derivado de que la información es insoslayable, resaltar que la información puede contener datos personales susceptibles de clasificar, ello es así ya que la excepción de publicidad, es aquella información que tenga el carácter de confidencial (datos personales), por lo que debe privilegiarse el acceso a la información bajo el principio de máxima divulgación, empero sin violar el derecho a la intimidad por medio de la protección de datos personales, por ende de la información que se ponga a disposición, su entrega deberá ser en versión pública; referencia cuyo fundamento legal aplicable se encuentra inmerso en los numerales de la Ley de la materia, que a la letra esgrimen:

***Artículo 3.*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*[…]*

***IX. Datos personales:*** *La información concerniente a una persona, identificada o identificable según lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México;*

***[…]***

***XLV. Versión pública:*** *Documento en el que se elimine, suprime o borra la información clasificada como reservada o confidencial para permitir su acceso.*

***Artículo 122.*** *La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente título.*

*[…]*

***Artículo 132.*** *La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:*

*[…]*

***II. Se determine mediante resolución de autoridad competente; o***

***Artículo 137.*** *Cuando un mismo medio, impreso o electrónico, contenga información pública y reservada o confidencial, la Unidad de Transparencia para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una versión pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación.”*

(Énfasis añadido)

En este sentido, el numeral trigésimo tercero fracción V de los Lineamientos Generales, precisa que para motivar la clasificación se deben acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en suma el Sujeto Obligado deberá cumplir cabalmente con las formalidades previstas en el artículo 137, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, así como con los numerales aplicables de los **LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS**, publicados en el Diario Oficial de la Federación en fecha quince de abril del año dos mil dieciséis, mediante Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Lo anterior es así, puesto que ha de destacarse que el artículo 91, de la Ley de la Materia, dispone que el acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando ésta sea clasificada como reservada o confidencial.

En el mismo sentido, en el caso específico, de los documentos solicitados pudieran obrar datos que son considerados confidenciales, cuyo acceso debe ser restringido, los cuales deben testarse al momento de la elaboración de versiones públicas, como es el caso del **Registro Federal de Contribuyentes** (RFC) y la **Clave Única de Registro de Población** (CURP).

En cuanto al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas que **no son proveedores**, constituye un dato personal, ya que para su obtención es necesario acreditar ante la autoridad fiscal previamente la identidad de la persona, su fecha de nacimiento, entre otros aspectos, cuyo trámite de inscripción en el registro, lo hacen con el propósito de realizar (mediante esa clave de identificación) operaciones o actividades de naturaleza fiscal, la cual, les permite hacer identificable respecto de una situación fiscal determinada.

Lo anterior, es compartido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), a través del Criterio de interpretación 19/17, de la segunda época, y SO/008/2019 de la Segunda Época, los cuales son del tenor literal siguiente:

*“****Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas.*** *El RFC es una clave de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial.*

*Resoluciones:*

*• RRA 0189/17. Morena. 08 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Joel Salas Suárez.*

*• RRA 0677/17. Universidad Nacional Autónoma de México. 08 de marzo de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.*

*• RRA 1564/17. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 26 de abril de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford.”*

Así, el **RFC** se vincula al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, su fecha de nacimiento, así como su homoclave, la cual es única e irrepetible y determina justamente la identificación de dicha persona para efectos fiscales, por lo que éste constituye un dato personal que concierne a una persona física identificada e identificable.

Ahora bien, en lo que corresponde a la Razón Social y RFC de las personas jurídico colectivas, los mismos son de naturaleza pública, en primer lugar porque la razón social se encuentra contenida en una fuente de acceso público y el RFC no arroja datos personales de una persona identificable, lo anterior, es compartido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), a través del Criterio de interpretación **SO/008/2019** de la Segunda Época, el cual es del tenor literal siguiente:

***“Razón social y RFC de personas morales.*** *La denominación o razón social de personas morales* ***es pública****, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio; asimismo, su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en principio, también es público, ya que no se refiere a hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo que sean útiles o representen una ventaja a sus competidores.*

*Precedentes:*

*• Acceso a la información pública. RRA 3104/16. Sesión del 01 de noviembre de 2016. Votación por unanimidad. Sin votos disidentes o particulares. Secretaría de la Defensa Nacional. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford.*

*• Acceso a la información pública. RRA 5402/17. Sesión del 25 de octubre de 2017. Votación por unanimidad. Sin votos disidentes o particulares. Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.*

*• Acceso a la información pública. RRA 7492/17. Sesión del 07 de febrero de 2018. Votación por unanimidad. Sin votos disidentes o particulares. Procuraduría Federal del Consumidor. Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana.”*

De este modo, como ha sido señalado en la presente resolución, en armonía entre los principios constitucionales de máxima publicidad y de protección de datos personales, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios permite la elaboración de versiones públicas en las que se suprima aquella información relacionada con la vida privada de particulares mediante el debido Acuerdo fundado y motivado en el que el Sujeto Obligado precise las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, asimismo, es claro que el mismo debe aplicar de manera restrictiva y limitada las hipótesis de clasificación y no hacerlas valer de manera general. Es importante señalar que, para acreditar dichos supuestos jurídicos se debe fundar y motivar correctamente la categorización de la información.

Por tanto, la fundamentación y motivación consiste en la obligación que tiene todo ente público de expresar los preceptos jurídicos aplicables al asunto motivo del acto y las razones o argumentos de su actuar.

Al respecto, el máximo tribunal del país ha establecido jurisprudencia respecto a qué debe entenderse por fundamentación y motivación, en los siguientes términos:

***“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.*** *La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.”*

Así, en un acto de autoridad se surte la debida fundamentación cuando se cita el precepto legal aplicable al caso concreto y la debida motivación cuando se expresan las razones, motivos o circunstancias que tomó en cuenta la autoridad para adecuar el hecho a los fundamentos de derecho.

Más aún, a través de diversa jurisprudencia dictada por el Poder Judicial de la Federación se sostiene que la finalidad de la fundamentación o motivación es la de explicar, justificar, posibilitar la defensa y comunicar la decisión de la autoridad:

***“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN****. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción.”*

En consecuencia, la fundamentación y motivación implica que, en el acto de autoridad, además de contenerse los supuestos jurídicos aplicables se expliquen claramente, por qué, a través de la utilización de la norma se emitió el acto. De este modo, la persona que se siente afectada pueda impugnar la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa.

Por lo tanto, la entrega de documentos en su versión pública debe acompañarse necesariamente del Acuerdo del Comité de Transparencia del Sujeto Obligadoque la sustente, en el que se expongan los fundamentos y razones que llevaron a la autoridad a testar, suprimir o eliminar datos de dicho soporte documental, ya que el no hacerlo implica que lo entregado no es legal ni formalmente una versión pública, sino más bien una documentación ilegible, incompleta o tachada; pues no señalar las razones por las que no se aprecian determinados datos, ya sea porque se testan o suprimen, deja al solicitante en estado de incertidumbre, al no conocer o comprender porque no aparecen en la documentación respectiva, es decir, si no se exponen de manera puntual las razones de ello se estaría violentando desde un inicio el derecho de acceso a la información del solicitante.

En mérito de lo expuesto en líneas anteriores, este Instituto considera que los motivos de inconformidad planteados por la parte **Recurrente** resultan fundados; por ello **con fundamento en la segunda hipótesis de la fracción III del artículo 186** de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se **MODIFICA** la respuesta proporcionada a la solicitud de información número **00480/SMOV/IP/2024**,que ha sido materia del presente estudio.

Por lo antes expuesto y fundado es de resolverse y,

**S E R E S U E L V E**

**PRIMERO.** Se **MODIFICA** la respuesta entregada por el **Sujeto Obligado** a la solicitud de información **00480/SMOV/IP/2024**, por resultar fundados los motivos de inconformidad argüidos por la parte **Recurrente**, en términos del considerando **CUARTO** de la presente resolución.

**SEGUNDO.** Se **ORDENA** al **Sujeto Obligado** que, haga entrega a la parte **Recurrente,** mediante el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), en su caso en versión pública de lo siguiente:

1. Soporte documental en que obre la cantidad de kilogramos o vehículos chatarrizados del uno de enero de dos mil trece al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce y del uno de enero de dos mil dieciocho al cuatro de julio de dos mil veinticuatro;
2. Los oficios firmados por el Director de Chatarrización o Reciclaje de los años 2022 y 2023

Para la entrega en versión pública de la información ordenada, deberá emitir el Acuerdo del Comité de Transparencia en términos de los artículos 49, fracción VIII y 132 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en el que funde y motive las razones sobre los datos que se supriman o eliminen y se ponga a disposición de la parte Recurrente.

En el supuesto que una vez agotada la búsqueda, se acredite no contar con la información por haber sido cancelados los documentos, deberá hacerlo del conocimiento de la parte Recurrente, en términos del párrafo segundo del artículo 19 de la Ley de Transparencia Local.

**TERCERO. NOTIFÍQUESE** la presente resolución a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX) al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, para que conforme al artículo 186 último párrafo, 189 segundo párrafo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente y, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**CUARTO.** De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el Sujeto Obligado, de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

**QUINTO. NOTIFÍQUESE** a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), a la parte **Recurrente** y hágasele del conocimiento que en caso de considerar que le causa algún perjuicio, podrá promover el Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DEL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS, MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA, SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ, LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA (EMITIENDO VOTO PARTICULAR) Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA, EN LA TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO, ALEXIS TAPIA RAMÍREZ. -------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CCR/\*

1. ***Artículo 179.*** *El recurso de revisión es un medio de protección que la Ley otorga a los particulares, para hacer valer su derecho de acceso a la información pública, y procederá en contra de las siguientes causas:*

   ***I****. La negativa a la información solicitada;* [↑](#footnote-ref-1)
2. ***Artículo 161.*** *Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco días hábiles. La fuente deberá ser precisa y concreta y no debe implicar que el solicitante realice una búsqueda en toda la información que se encuentre disponible.* [↑](#footnote-ref-2)